

Citation for published version:

Marco, J 2010, De julio a noviembre. La organización de la justicia militar en 1936. in *II Encuentro de Jóvenes investigadores en Historia Contemporánea*. Universidad de Granada, Granada.

Publication date:

2010

Document Version

Early version, also known as pre-print

[Link to publication](#)

University of Bath

Alternative formats

If you require this document in an alternative format, please contact:
openaccess@bath.ac.uk

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Jorge Marco, 'De Julio a Noviembre: la organización de la justicia militar en 1936', *II Encuentro de Jóvenes Investigadores en Historia Contemporánea* (Granada: Universidad de Granada, 2010)

De Julio a Noviembre
La organización de la justicia militar en 1936

Jorge Marco (UCM)

La justicia militar y la política penitenciaria formaron la médula espinal de la represión franquista. Durante los primeros meses del golpe militar de 1936, dos hechos trascendentales tuvieron lugar de forma simultánea: se produjo el mayor número de víctimas por medios extrajudiciales y se asentaron las bases del aparato jurídico que continuó, con escasos cambios, durante el resto de la dictadura. La presente comunicación se centrará en cómo fue el proceso de articulación de la justicia y su arquitectura básica diseñada en los primeros cinco meses después del golpe militar.

1.- De Julio a Noviembre.

La sublevación se inauguró en cada una de las guarniciones con un bando de guerra. Todos, más allá de los matices, tenían tres elementos en común: la declaración del estado de guerra, la implantación de la justicia militar, y la imposición de los juicios sumarísimos.

Los bandos de guerra establecían una perversa inversión. Los sublevados, detentadores de la nueva autoridad, juzgaban como rebeldes a aquellos que defendían el orden constitucional. Al mismo tiempo, los militares resolvían el largo conflicto entablado con los gobiernos civiles por el espacio que debía ocupar la jurisdicción militar en la sociedad. La República había sido la última en abordar el asunto, y entre 1931 y 1936 -particularmente en el primer bienio republicano-, acometió una profunda reforma de la justicia, limitando la jurisdicción militar “a los delitos militares, a los servicios de armas y a la disciplina de todos los Institutos armados”¹. En resumen, ningún civil

1 Artículo 95 de la Constitución de la República española, 1931

podía ser sometido a la justicia militar². Esta situación cambió a partir del 17 de julio de 1936 y se prolongó hasta el final de la dictadura: cualquier individuo, fuera cual fuera su condición jurídica, podía ser sometido a un procedimiento militar.

El 24 de julio de 1936 se constituyó la Junta de Defensa Nacional de España (JDNE) como órgano rector de los sublevados bajo la presidencia de Miguel Cabanellas. Cuatro días más tarde se publicó un bando unificado, “con el fin de establecer una unidad de criterio”. Así comienza la acelerada y progresiva constitución de la arquitectura jurídico-militar en los primeros meses de la guerra. El bando del 28 de julio de 1936 consta de doce artículos de los cuales, ocho hacen referencia directa a la justicia militar. A los tres elementos que antes destacamos se agrega un nuevo. A partir de ese momento quedan tipificados y clasificados los delitos que serán juzgados en juicio sumarísimo.

En paralelo a la publicación de los primeros bandos se produce una intensa movilización en las Auditorías de Guerra, multiplicando sus plazas y juzgados. En tan sólo unas semanas la infraestructura diseñada para juzgar delitos “estrictamente militares” se vio desbordada por la apertura de miles expedientes contra civiles acusados de rebelión. Se hizo evidente entonces la falta de medios y sobre todo, la de personal especializado para asumir la avalancha. De este modo, entre julio y diciembre de 1936 cientos de soldados sin el menor conocimiento judicial fueron enviados a las Audiencias para desempeñar distintos cargos, al mismo tiempo que se reincorporaban militares de la reserva, se militariza al personal afecto de la justicia ordinaria y otros profesionales del ámbito jurídico como abogados, notarios o registradores. El 7 de enero de 1937 se anunciaba que el personal necesario para los servicios de la justicia militar estaba cubierto, por lo

2 Un mayor análisis sobre los conflictos a la largo de plazo entre los militares y el poder civil sobre las jurisdicciones y los cambios legislativos en el periodo republicano, ver en: BALLBÉ, Manuel: Orden público y militarismo en la España constitucional, 1812-1983, Madrid, Alianza, 1985; PEDRAZ PENALVA, Ernesto: “La Administración de la Justicia durante la guerra civil en la España Nacional”, en: VVAA: *Justicia en Guerra*, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1990.

que no eran necesarias, de momento, nuevas incorporaciones³. Pero el avance de la guerra y la ocupación de nuevos territorios trajo consigo la necesidad de abrir nuevos juzgados, al mismo tiempo que realizar un nuevo esfuerzo por reclutar personal especializado. Así lo pone de manifiesto la Secretaría de Guerra después de la caída Málaga en febrero de 1937⁴. A lo largo de la guerra la dinámica continuo siendo la misma y en el futuro, sería interesante analizar el progresivo crecimiento de la justicia en paralelo a los avances militares, prestando especial atención a la incorporación del personal civil militarizado.

Al mismo tiempo, el esfuerzo de los mandos militares se centró en marcar las directrices primordiales de la nueva justicia militar. Los bandos de guerra habían establecido un antes y un después respecto a la legislación republicana, pero en los primeros meses de la guerra se procedió a derogar, explícita e implícitamente, todo el ordenamiento jurídico de la República, recuperando viejos corpus legislativos y aprobando nuevos decretos fundamentales.

El 27 de agosto de 1936 se publicó el Decreto nº 64 donde se ratificaba la preeminencia de la justicia militar sobre la ordinaria. Se agrega, además, que los Generales Jefes de los Ejércitos de operaciones podían delegar en los Generales Comandantes, o en los de Brigadas o Columnas, el ejercicio de la jurisdicción en los “territorios que vayan quedando bajo su dominio como resultado de las operaciones del Ejército a sus órdenes”⁵. En la práctica esto significó la creación de una especie de juzgados móviles incrustados en las columnas de ocupación que abrían expedientes incluso antes de tomar una plaza. Largas listas de sospechosos y denuncias solían acumularse durante el asedio de un pueblo o una ciudad, preparas para el asalto definitivo.

Tan sólo cuatro días después, el 31 de agosto, se restablecía la vigencia del Código de Justicia Militar de 1890 en todos sus apartados, desmontando, de forma definitiva, la legislación

3 Orden de 1 de noviembre de 1936 (BOE, 2 de noviembre de 1936) y Orden de 1 de diciembre de 1936 (BOE, 2 de diciembre de 1936). Ver también: LANERO, Mónica: *Una milicia de la justicia. La política judicial del franquismo, 1936-1945*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1996. Un relato personal sobre este proceso: RUIZ VILLAPLANA, A: *Doy fe. Un año de actuación en la España Nacionalista*, Epidauro, Barcelona, 1977

4 Orden de 24 de mayo de 1937 (BOE, 25 de mayo de 1937)

5 Decreto 64 (BOJDNE, 27 de agosto de 1936)

republicana. Este hecho es importante porque dicho Código, modificado a lo largo de los años con pequeños cambios, permanecerá vigente hasta 1945, fecha en que la dictadura presentó su nuevo Código. En su preámbulo, Cabanellas, todavía presidente de la Junta de Defensa Nacional, señala que “se hace necesario en los actuales momentos, para mayor eficiencia del movimiento militar y ciudadano, que la norma en las actuaciones judiciales castrenses sea la rapidez”, es decir, que en estos tiempos de guerra se deben instruir tan sólo juicios sumarísimos de urgencia. De algún modo, confirma lo que se había establecido desde los primeros bandos guerra: la justicia militar debe ser rápida, contundente y eficaz⁶.

La retroactividad de las leyes, una aberración jurídica en todos sus términos, será una de las características fundamentales de la justicia militar durante la guerra y la posguerra. Así, el 13 de septiembre de 1936 se aprueba el conocido decreto 108, por el cual se declaraban “fuera de la Ley todos los partidos y agrupaciones políticas o sociales que, desde la convocatoria de las elecciones celebradas en fecha 16 de febrero del corriente año han integrado el llamado Frente Popular, así como cuantas organizaciones han tomado parte en la oposición hecha a las fuerzas que cooperan al movimiento nacional”⁷. La práctica represiva había usado este argumento jurídico desde el minuto cero del golpe de estado, pero a partir de este momento la simple pertenencia a un partido o aun sindicato podía acarrear la acusación de asociación ilícita, y por lo tanto, la apertura de un consejo.

A la altura de octubre de 1936 los militares sublevados consideraban que la victoria estaba próxima. Madrid había quedado cercada y su caída era cuestión de tiempo. Ante esta perspectiva, el 29 de septiembre se promulga un decreto en el que se nombra Jefe de Gobierno del Estado Español a Francisco Franco. Dos días después se disuelve la JDNE y se constituye la Junta Técnica del Estado. La organización de la justicia militar, en vista de la inminente toma de Madrid, no se hizo esperar. El 24 de octubre se crea el Alto Tribunal de Justicia Militar, instancia donde se deben dirimir los recursos planteados y los conflictos de jurisdiccionales. Una semana más tarde se

6 Decreto 79 (BOJDNE, 4 de septiembre de 1936)

7 Decreto 108 (BOJDNE, 16 de septiembre de 1936)

crearon ocho Consejos de Guerra y 16 Juzgados Militares con carácter permanente en Madrid, con el objeto de canalizar toda la represión en la región militar cuando fuera ocupada⁸. El devenir de la guerra fue en cambio muy diferente. Las tropas franquistas tan sólo pudieron tomar la ciudad dos años y medio mas tarde, eso sí, con una infraestructura y mecanismos represivos mucho más sofisticados. En cualquier caso, el articulado del Decreto 55 fue aplicado a nivel nacional, convirtiéndose en una de las referencias básicas sobre la aplicación de los procedimientos en los juicios sumarísimos.

El mismo día en que se aprobó la creación de las ocho Auditorías, Francisco Franco firmó un segundo decreto por el que declara que “la naturaleza del movimiento nacional no necesita de normas derogatorias para declarar expresamente anuladas todas cuantas se generaron por aquellos órganos que revestidos de una falsa existencia legal mantuvieron un ficticio funcionamiento puesto al servicio de la antipatria”. Además, para evitar errores respecto a la legislación posterior al golpe aprobada en la zona sublevada, declara “sin ningún valor ni efecto todas las disposiciones que dictadas con posterioridad al 18 de julio último, no hayan emanado de las Autoridades Militares dependientes de mi mando, de la Junta de Defensa Nacional de España o de los organismos constituidos por Ley de 1º de octubre próximo pasado”⁹. Los militares rebeldes y su líder indiscutible, Francisco Franco, eran los únicos que marcaban las reglas del juego en la represión de la retaguardia.

Así, entre julio y noviembre de 1936, los militares habían logrado construir y articular la arquitectura de la represión a través de la justicia militar. Cinco meses tan sólo, los cinco meses que duró el fallido golpe de estado. A partir de diciembre, tras la derrota en Madrid, comienza una larga guerra civil que no concluyó hasta la primavera de 1939. A partir de ese momento se redujo el número de ejecuciones extrajudiciales y será la justicia militar, a través de los consejos de guerra sumarísimos, la que se encargará de la gran labor represora en la retaguardia.

8 Decreto 42 (BOE, 1 de noviembre de 1936) y Decreto 55 (BOE, 5 de noviembre de 1936)

9 Decreto 56 (BOE, 5 de noviembre de 1936)

2.- Proceso 59: Julio de 1936¹⁰.

A continuación vamos a realizar el análisis de un caso para poder constatar algunos de los elementos que hemos señalado, y observar, en un enfoque micro, las dudas, los desajustes y las decisiones que se adoptaron en un contexto de incertidumbre legal y de consolidación del nuevo sistema.

La sublevación en la ciudad de Granada triunfó el 23 de julio, tres días después de intensa resistencia. El día 26, Manuel Carmona Ruiz, de 35 años, metalúrgico y directivo de la Asociación Obrera Azucarera, se presentó voluntario ante la policía. El día 20 había tenido lugar el levantamiento de las tropas en la capital y el coronel Muñoz, líder de la revuelta, obligó al general Campins a firmar un bando de guerra. En aquel bando, en su artículo séptimo, declaraba que “todo individuo que tuviese en su poder armas de cualquier clase de arma o explosivos, debe entregarlas antes de las veinte horas de hoy en el puesto militar o de Guardia Civil más próximo”. El bando fue firmado el mismo día 20 y publicado en el diario Ideal al día siguiente¹¹.

Manuel Carmona Ruiz no había participado en la resistencia pero tampoco entregó su arma. Al enterarse del golpe se refugió en casa de un familiar y después del triunfo, un amigo policía le informó de que la policía le estaba buscando. El día 26, Manuel, asustado, pidió a su amigo que le acompañara a la comisaría. Esa misma mañana se presentaron en el edificio de Investigación y Vigilancia y Manuel presentó una pistola marca Star y la licencia de armas a su nombre. Inmediatamente fueron decomisadas y Manuel detenido. Era la una y media de la tarde cuando fue interrogado en la misma comisaría por dos guardias, y una vez concluida la declaración, el jefe de policía ordenó el registro de su casa y la declaración del agente que acompañó a Manuel a la comisaría. El registro no dio resultado alguno y a continuación, el jefe de policía envió a Manuel a la cárcel mientras remitía al Juzgado las declaraciones y los resultados del registro.

La movilización de la justicia militar en Granada fue inmediata. El día 28 de julio, dos días

10 Consejo de Guerra 59/1936 Caja 914 (Archivo del Tribunal Togado Militar de Almería)

11 Ideal, 21 de julio de 1936.

después de ser detenido y cinco días después del triunfo del golpe, se ordenan las primeras diligencias contra Manuel Carmona Ruiz en el proceso número 59. En tan sólo cuatro días se habían abierto, al menos, 58 causas contra un número desconocido de personas. El juzgado que abre la instrucción todavía no tiene nombre. En la parte superior de la portada, a máquina, se puede leer: Juzgado de Instrucción Militar Eventual. La instrucción de las causas siempre estuvieron a cargo de dos responsables militares: el juez instructor y el secretario. En este caso ambos eran militares movilizadas en los primeros días desde la reserva. El primero, Manuel Parada Justel, teniente coronel de artillería retirado. El segundo, José Abella Lucena, sargento de la guardia civil retirado.

Las diligencias dieron comienzo el día 28, y lo primero que solicita el juez son los antecedentes del detenido. La Comisaría de Investigación y Vigilancia remite entonces un informe donde destaca que Manuel Carmona Ruiz fue detenido el 7 de octubre de 1934 con una pistola y una escopeta. Fue condenado a cuatro meses y un día de prisión acusado de tenencia ilícita de armas. El 27 de julio de 1935 fue detenido de nuevo por amenazar de muerte con una pistola a un fascista (sic), cuestión que el acusado ha negado en su interrogatorio. En la actualidad, es directivo de la Asociación Obrera Azucarera y portador de un arma corta que no había entregado en los plazos estipulados por el bando de guerra.

La práctica habitual en los Consejos de guerra sumarísimos durante la guerra era sencilla y abreviada, por lo que a partir de este momento las diligencias eran suficientes para elevar la causa a plenario. En cambio, en este caso, la situación es diferente. Manuel Parada Justel, juez instructor de la causa, varía los términos del procedimiento y en vez de continuar las pautas de un juicio sumarísimo, adopta medidas propias de un procedimiento ordinario. Así, solicita el estudio del arma decomisada el 1 de agosto de 1936 y ese mismo día, los peritos le remiten un informe. En él se señala que el arma es nueva, que se ha utilizado escasamente, y que la última vez que debió ser utilizada debió ser entre el 1 de junio y el 1 de julio de 1936. El arma en ningún momento fue utilizada, por lo tanto, durante el golpe militar, o lo que es lo mismo, no se empleó en la resistencia contra los militares sublevados. Además, el juez recibe copia de la Licencia de uso de armas de

Manuel Carmona Ruiz, firmado por el gobernador civil de la provincia el 4 de mayo de 1936.

El juez instructor, una vez terminadas las diligencias, elabora el auto-resumen el 3 de agosto y se lo remitió al Comandante Militar y a la Auditoría. El día 8 llega la ratificación del Comandante Militar, y al día solicita un abogado defensor para el acusado. El día 10 el abogado defensor acepta el cargo reservándose el derecho a rectificar después de tener la primer entrevista con el acusado. La entrevista se realiza y el abogado ratifica su decisión, por lo que, complicando aun más el procedimiento, el juez instructor elabora un nuevo auto-resumen donde incorpora las diligencias de la Comandancia y del Abogado defensor, elevándola de nuevo a la Comandancia y a la Auditoría el día 11.

Dos días después la Auditoría recibió un decreto firmado por la Comandancia anulando el procedimiento. Razón: defecto de forma. Tres son los aspectos que subraya el escrito. Primero, los delitos establecidos por bando de guerra deben ser juzgados por procedimiento sumarísimo y este juicio, en mitad de su instrucción, adoptó medidas del procedimiento ordinario. Segundo, el tiempo reglamentario entre la elevación de la causa a plenario, la entrega de la causa al fiscal y la designación de un abogado defensor no debe superar las tres horas, y en este caso se tardó nada menos que cinco días en hacerlo, alargando inútilmente el procedimiento. Tercero, después de la asignación del abogado defensor se realizó un nuevo auto-resumen y se volvió a remitir a la Comandancia y a la Auditoría, hecho del todo innecesario y que de nuevo, contradice la esencia del juicio sumarísimo. El procedimiento general, tal y como se estipula el capítulo XIX del Código de Justicia Militar, es mucho más rápido y sencillo, y así debía aplicarse. Hagamos un breve resumen sobre la normativa:

1) Terminadas todas las diligencias, el juez instructor redacta un breve resumen que eleva a la Autoridad Judicial.

2) El Auditor en ese momento decide si la causa debe ser elevada a plenario. De ser procedente, el Auditor debe realizar tres acciones inmediatas: a) entregar la causa al Fiscal por un tiempo menor a tres horas, b) asignar un abogado defensor al recluso o reclusos y c)

designar a los miembros que constituyan el Consejo de Guerra.

3) El abogado defensor, con menos de tres horas para consultar la causa, debe presentarse junto al procesado ante el juez instructor, el cual informará al reo de los cargos que se le imputan, leyéndole las diligencias y declaraciones que se adjuntan. A continuación tanto el abogado defensor como el fiscal pueden presentar alegaciones, hecho que en la práctica era inaudito.

4) El abogado defensor cuenta con tres horas para consultar los autos de manifiesto.

5) Concluidas las tres horas, se procede a la celebración del Consejo de Guerra.

El decreto de la Comandancia tenía un claro objetivo. Al comienzo de la implantación de la nueva justicia militar surgían dudas, desajustes, y era necesario marcar las pautas por las que debían transcurrir los consejos sumarísimos. Dos consignas eran las dominantes: la rapidez y la eficacia. eliminando El decreto firmado por la Comandancia Militar ponía en evidencia los desajustes de la De todos modos, Manuel Carmona Ruíz tampoco se vio beneficiado por esta situación. Dos horas después la propia Comandancia revoca su decisión y convoca a las ocho de la noche del mismo día 13 la celebración del Consejo de Guerra. A las dos y media de la tarde se asignó al reo un nuevo abogado, el Alferez de Complemento José Cantero Roldán, el cual, a las cuatro de la tarde, se presentó en la prisión para que asista a la lectura de los cargos. Cuatro horas después, a las ocho en punto, el Consejo de Guerra estaba reunido. Manuel Carmona Ruiz fue acusado de tenencia ilícita de armas, a pesar de su licencia, y su abogado solicitó una pena de 30 años, en contraste de la del fiscal: pena de muerte. Su presentación voluntaria y la entrega del arma, argumentó, merecían esa rebaja. El Tribunal condenó a Manuel Carmona Ruiz a pena de muerte.

En la madrugada del día 14 el Comandante Militar ratifica la sentencia, “acertada y ajustada a derecho”. Unas horas después, a las cinco de la madrugada, Manuel Carmona Ruiz fue ejecutado en las proximidades del cementerio.